

# Supervivencia del Pasado

- ★ Abrió el EZLN una Real Posibilidad de Democracia
- ★ Resulta Inmoral la Resistencia de la Elite Política
- ★ Complicidades a la Sombra del Estado Autoritario

LORENZO MEYER

El PRI acaba de cumplir 65 años de monopolizar el poder, es este, por tanto, un buen momento para preguntarse: ¿Quién es realmente el que está fuera de su tiempo histórico? ¿Quién es el nostálgico del pasado? ¿El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), como han asegurado algunos, o el viejo régimen de partido de Estado contra el cual se levantaron los nuevos zapatistas?

El PRI nació en 1929, cuando los partidos no democráticos —comunistas o fascistas— parecían ser las organizaciones del futuro en países que buscaban un atajo histórico para recuperar el tiempo perdido en su desarrollo.

Aceptemos, pues, que el PRI de aquel entonces —PNR primero y PRM después— sí contribuyó a la modernización de un país subdesarrollado, fragmentado, inestable y violento. Sin embargo, mucha agua ha pasado desde entonces bajo el puente de la historia mexicana, y hoy, a 65 años de distancia, el régimen de partido de Estado se ha quedado estancado, se ve demodé. En realidad, constituye ya, y desde hace tiempo, un obstáculo a la modernización de la sociedad mexicana.

En la ceremonia del 65 aniversario del partido de Estado, su candidato presidencial, Luis Donaldo Colosio, declaró que el PRI dejaba de ser lo que le había distinguido desde el momento mismo de su nacimiento —marzo de 1929— hasta ahora: un partido creado y sostenido por y para el gobierno. Desafortunadamente, la credibilidad no ha sido nunca uno de los puntos fuertes del liderazgo del PRI. Desde un principio, desde hace 65 años, las declaraciones de Plutarco Elías Calles —padre del PRI— fueron contradichas por los hechos. ¿Por qué habremos de suponer que hoy las cosas serán diferentes? Para empezar, el propio Colosio llegó a donde ha llegado —a candidato presidencial—, gracias a una clara decisión no de los militantes de su partido, sino exclusivamente del Jefe del Estado. Fue en Los Pinos —residencia oficial de ese Jefe del Estado— y no en la sede del PRI, donde el Presidente de la República y no el presidente del CEN del PRI, se vio obligado a reconfirmar a Colosio como el portaestandarte del partido del gobierno. Y esta reconfirmación tuvo lugar no ante la directiva del PRI como tal, sino ante los miembros del gabinete y el resto de la élite gubernamental, incluidos aquellos que dicen no ser miembros del PRI. ¿Quién puede creer, pues, que a partir del 6 de marzo de 1994, y por una mera declaración, el PRI será, por primera vez en su vida, un partido como cualquier otro, sin las ventajas ilegales e ilegítimas que le ha dado su fusión con el aparato del gobierno?

Pero volvamos al punto de partida, a la discusión sobre la modernidad de nuestros actores políticos. Para aquellos que se identifican con el salinismo y

su proyecto, la decisión del EZLN de tomar las armas como la única vía para, entre otras cosas, poner fin al sistema de partido de Estado y permitir la transición a la democracia, les irritó en extremo y la calificaron de absurda, impropia y, sobre todo, de fuera de tiempo. Se trataba, dijeron, de una acción más propia de la Centroamérica de hace veinte años que del México neoliberal, del país del TLC y que está a punto de obtener su ingreso al club de los grandes de la economía mundial: a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD). Pues bien, creo que hay material para proponer la hipótesis contraria: ver al EZLN como una de las posibles respuestas racionales, eficientes y adecuadas a las circunstancias, es decir, a un presidencialismo premoderno.

Desde esta perspectiva, lo realmente viejo, obsoleto, premoderno e inmoderno, es la resistencia de la élite política mexicana en el último cuarto de siglo, a responder positivamente a la demanda de abrir el sistema a la genuina competencia democrática. Tan feroz resistencia, es resultado de un complejo tejido de complicidades y de grandes intereses económicos creados a la sombra del Estado autoritario. Es verdad que la acción de los soldados indígenas del EZLN para empujar a la atascada transición mexicana a la democracia, no es la única posible, pero sin duda es una acción racional y, dadas las circunstancias, eficaz. Si la guerrilla parece ser cosa del pasado, resulta que también lo es, y aún más, aquello que la motivó: el presidencialismo sin límites y el PRI de los 65 años.

Pero, ¿qué es la modernidad política? Luis Salazar C. nos ofrece una respuesta en "Modernidad, política y democracia", Revista Internacional de Filosofía Política (No. 1, 1993). Dice ahí: moderno es lo que se opone a lo tradicionalista y "...en este sentido, se definiría [moderno por una posición que hace del futuro, y no del pasado, la clave del sentido y del valor de la existencia]" (Pág. 72). En contraste, lo no moderno, lo tradicional, es una política donde no se tienen por superables las características originales, i.e., el "destape", Fidel Velázquez, el

fraude electoral, la confusión entre partido y gobierno, etcétera.

Cuando surgió y adquirió forma el régimen actual —en los años veinte y treinta—, una parte sustantiva de sus energías se dirigió a romper con el pasado —organizar campesinos y obreros, transformar el sistema de propiedad rural, nacionalizar el petróleo, etcétera. Sin embargo, a partir de los años cuarenta, esa energía reformista liberada por la Revolución, se agotó y dio paso a una práctica política que, curiosamente, cristalizó en formas no del todo diferentes de las del siglo XIX.

Una muy buena caracterización de la naturaleza de la vida política del siglo pasado se encuentra en la obra de Fernando Escalante, *Ciudadanos imaginarios* (El Colegio de México, 1992). El México de hoy, el del PRI de los 65 años, comparte con el del siglo anterior una característica central: la persistencia de un golfo enorme entre el marco legal en el que debería discurrir la vida pública y las reglas reales —en buena medida ilegales— que efectivamente la dominan.

En el México del XIX, prácticamente no había ciudadanos; los actores políticos eran las colectividades, las corporaciones, que negociaban sus demandas y apoyos con un poder estatal relativamente débil. Hoy ese poder estatal es relativamente fuerte pero los ciudadanos —individuos libres, que exigen y luchan por sus derechos— siguen siendo una minoría. El orden actual, como el del siglo pasado, no es realmente el propio de un estado de derecho, sino uno que sigue dependiendo de un sistema de lealtades particulares y de relaciones clientelísticas, y que en gran medida son la base y la fuerza del PRI: sindicatos, ejidos, organizaciones de colonos, agrupaciones empresariales, etcétera. En este mundo como en el decimonónico, los intermediarios son los grandes señores de la política: antes Juan N. Álvarez, Manuel Lozada, Santiago Vidaurri o Ignacio Pesqueira y muchos. Hoy, son los Gonzalo N. Santos, los Fidel Velázquez, los Martínez Domínguez, los Hank González, etcétera.

En el siglo XIX, la política era vista como el "patrimonio de los pillos". En la actualidad, y según las encuestas de opinión, la si-

tuación sigue igual o muy parecida. La corrupción se mantiene como un elemento dominante en la vida pública, como el pegamento que mantiene unido a un sistema donde la ley se aplica sólo al que no tiene manera de evitarla. En el siglo pasado, dice Escalante, "La forma más cruda del mecanismo de reciprocidad del orden político era el cambio de lealtad por impunidad" (Pág. 251). Más adelante afirma: "En el México decimonónico, la corrupción era indispensable para que los intermediarios mantuvieran su posición de influencia: necesitaban manejar, de un modo u otro, los cargos públicos, necesitaban disponer de fondos y también de un margen de acción fuera de la ley para negociar favores e intercambios" (Pág. 252); ¿acaso hoy la situación es distinta? Sin duda que en la actualidad es más difícil manipular las elecciones de lo que era para los porfiristas; sin embargo, como se vio clara y transparentemente en 1988, eso no impide que, finalmente, los resultados sean los previstos de antemano: los que requería el gobierno.

En contraste, el Manifiesto de la Selva Lacandona del EZLN o las demandas de los zapatistas en las negociaciones de paz

de San Cristóbal, son proyectos efectivamente orientados hacia el porvenir, son, por tanto, modernos, pues hacen de la rebelión chiapaneca un esfuerzo de construcción de un México muy distinto del pasado y del actual; uno donde el marco legal y la realidad cotidiana no se encuentren en extremos opuestos.

En el discurso, pero sobre todo en los hechos, lo logrado por los rebeldes chiapanecos, cuadra más con la modernidad política que con nostalgias centroamericanas que le atribuyen los salinistas. Cuando el EZLN, apoyado en las armas, declaró ilegítimas las elecciones de 1988 y exigió el fin efectivo del régimen de partido de Estado, desató una reacción en cadena que abrió efectiva-

mente la posibilidad de poner fin al proyecto salinista de elecciones con resultados arreglados de antemano, a la "Operación Patrocinio".

Sin la acción decisiva del EZLN —catalizador de la exigencia democrática de un sector social más amplio—, probablemente hubiéramos llegado a agosto con una Secretaría de Gobernación —Patrocinio González et al.—controlando la acción global de ese gobierno en materia electoral según las recetas del pasado. Hoy, tras y gracias al levantamiento chiapaneco, se abre la posibilidad de que la naturaleza del proceso electoral de agosto sea distinta, moderna.

Objetivamente, el subcomandante Marcos y el EZLN, no han funcionado

como emisarios del pasado. Su proyecto no es volver a algo que alguna vez fue, sino acelerar el advenimiento de un México nuevo, cuyo reto es superar el siglo XIX: hacer efectivo el estado de derecho pensado por los liberales decimonónicos, y de la justicia social, prometida por la Revolución de 1910.

Una nota final, pero que no por ello deja de ser importante: la detención y

tortura de dos jóvenes universitarios —Jorge Bustamante y David Lascari— tras protestar el 24 de febrero frente a la Secretaría de la Defensa por la violación de los derechos humanos en Chiapas, no fue sólo una muestra de la ilegalidad imperante —y por la cual se debe protestar—, sino, también, de estupidez política. Pareciera que la lección del 68 aún no ha sido asimilada por quienes debieran.